

La viuda de Buesa pide a Ibarretxe una «política diaria de deslegitimación» de ETA

Cree insuficientes los homenajes si se actúa como si la banda «no existiera»

Propone crear un canal de participación para las víctimas

OLATZ BARRIUSO BILBAO

La presidenta de la Fundación Fernando Buesa y viuda del político socialista asesinado por ETA pidió ayer al Gobierno vasco que no limite la reparación a las víctimas del terrorismo a homenajes como el celebrado el pasado 22 de abril, sino que aplique también «una política diaria decidida de clara deslegitimación» del proyecto que la banda «trata de imponer». Natividad Rodríguez aprovechó la presentación en Bilbao del libro 'El significado político de las víctimas del terrorismo: el valor del Estado de Derecho y la ciudadanía' para profundizar en los argumentos con que justificó su ausencia en el acto organizado hace dos semanas por el Gabinete Ibarretxe en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

En ese sentido, y aunque dijo no dudar del efecto reconfortante que el homenaje pudo tener para muchos damnificados ni de las «buenas intenciones» del lehendakari, consideró que la cita debería haber sido el «colofón» de los acuerdos parlamentarios sobre víctimas consensuados en 2003 y aún incumplidos en buena parte y alertó también del peligro de que de cara al futuro se actúe «como si ETA no existiera». De hecho, dijo echar en falta «y manifestó su «desconfianza» y su tristeza por ello-mayores avances en la deslegitimación política y social del uso de la violencia y del proyecto que los terroristas buscarían imponer «sobre la sangre» de las víctimas. Citó, por ejemplo, las carencias en pedagogía política y en promoción de valores de paz en los centros educativos o el «protagonismo desmesurado» que «los victimarios y sus



LIBRO. Los socialistas López y Loza y el popular Barreda saludan a Natividad Rodríguez y Arregi. / EFE

cómplices políticos» han cobrado en los medios de comunicación. Una situación que podría haberse paliado, en su opinión, de haberse aplicado adecuadamente el paquete de medidas aprobado en sede parlamentaria.

Por ello, sugirió al Gobierno vasco que establezca un «calendario» de aplicación de las propuestas a las que se dio luz verde entonces y lanzó una segunda propuesta para que las instituciones articulen algún tipo de mecanismo que permita la participación directa de las víctimas «en todo aquello que tenga que ver con ellas y su memoria».

Mensaje del juez

Los argumentos de Rodríguez fueron corroborados por el ex dirigente del PNV Joseba Arregi, hoy presidente de Aldaketa. Esta plataforma, promotora de un cambio político en Euskadi, colabora con la Fundación Fernando Buesa en la edición de la obra presentada ayer, que recoge las cinco ponencias difundidas en unas jornadas organizadas por ambos colectivos hace dos años. Siguió sus palabras una muy nutrida representación del PSE —encabezada por su

Arregi alerta de que las instituciones «pasen página» con las víctimas

líder, Patxi López, que acudió acompañado, entre otros, por el candidato a diputado general de Vizcaya, José Antonio Pastor— y los representantes del PP Leopoldo Barreda y de EB Mikel Arana. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez trasladó, a través de una intervención grabada en vídeo, su cercanía y la de este tribunal con las víctimas del terrorismo y pidió que no se las «arrinconen» ni se «pisoteen» su dignidad. El PNV y EA no estuvieron representados por problemas de agenda, según la organización.

Precisamente al nacionalismo dirigió Arregi uno de los mensajes fundamentales de su discurso, que insistió en la idea de que no es posible «hacer borrón y cuenta nueva» y obviar que ETA sigue en activo. De hecho, alertó de que aun-

que las víctimas ya han logrado salir del «túnel» de olvido y abandono en que han estado sumidas durante años, se corre el riesgo ahora de sustituir «una ceguera por otra» y dejarse deslumbrar «por la luz del mediodía». Advirtió en este sentido sobre la posibilidad de que los poderes públicos asuman que «todo es reconciliación, todo es perdón» y decidan «pasar página» y olvidar que las víctimas perdieron la vida porque eran un «impedimento» para los planes «totalitarios» de ETA. Por ello, expresó su desacuerdo con la máxima según la cual no debe pagarse precio político por la paz pero tampoco aceptar que la violencia terrorista invalida el proyecto político que se defiende con las armas en la mano. «Lo siento mucho, pero si ETA ha matado por una causa nacionalista, esa causa ha quedado dañada en todos y cada uno de los asesinados y esa memoria no la podemos ni la debemos perder», subrayó Arregi, que, en consecuencia, instó al nacionalismo a «reformularse» para que su discurso resulte «compatible» con la memoria de los asesinados.

■ o.barruso@diario-elcorreo.com

OBISPO URIARTE

Compromiso por la paz y el diálogo

El obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, se comprometió ayer a trabajar «hasta que pueda» y Dios le «dé fuerzas» a favor de «la paz, el diálogo, de que se acabe la violencia totalmente». El religioso, que también se afanará en que «todos los derechos personales y colectivos se respeten», hizo estas declaraciones durante la celebración de sus bodas de oro presbiteriales.

PARTIDO POPULAR

Denuncia amenazas de candidato de ANV

El PP del País Vasco ha denunciado «insultos y amenazas» vertidas ayer por una quincena de personas, entre ellas el número 1 de la lista de ANV por Rentería, Juan Carlos Murua, contra el presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, durante la visita que realizó a la localidad guipuzcoana. Arenas cierra la candidatura conservadora.

DE LA UE

España lidera los recursos al Defensor

Los españoles son los ciudadanos de la UE que más recurren al Defensor del Pueblo Europeo para quejarse de la mala actuación de las instituciones comunitarias. De las 3.830 reclamaciones recibidas en 2006, 781 (20%) eran de España, líder habitual en recursos a esta entidad. Le siguen Alemania (14%) y Francia (9%).

LEY DE IGUALDAD

El PP recurre 9 listas en La Rioja

El PP de La Rioja recurrió ayer nueve candidaturas municipales en la comunidad por vulnerar la Ley de Igualdad. Entre ellas la del PSOE de Nájera y cinco de los regionalistas (PR).

JUEGO DE APARIENCIAS

Con la impugnación por la Fiscalía y la Abogacía del Estado de las listas electorales de ANV ha concluido la fase más política del espectáculo en el que se ha convertido la interminable historia de cómo, con quién y dónde se presenta la izquierda abertzale tradicional. Tanto el Gobierno como Batasuna han jugado su papel: es decir, el que les interesa. El Gobierno ha querido dejar claro ante la ciudadanía que todas sus actuaciones han estado guiadas por el propósito de cumplir y hacer cumplir la Ley de Partidos en su «letra y en su espíritu», pero guardando un equilibrio absoluto con el derecho al sufragio acti-

vo y pasivo, en palabras de Conde Pumpido.

Es obvio que con dicho mensaje ha querido cubrir el flanco de las críticas de los «populares», que han exigido a Zapatero la impugnación de todas las listas y hasta la misma ilegalización de ANV, sencillamente porque tienen la convicción política de que todas las listas han sido obra y arte de Batasuna, aunque se carezca del material probatorio suficiente para transformar esa convicción en certeza jurídica, cuando menos en lo que respecta a las listas del viejo partido. Además, el juez Gartzón ha avalado, en el momento, el carácter democrático y legal de esta formación al esta-

blecer que no tiene vinculación alguna con ETA-Batasuna.

Para una buena parte de la opinión pública el Gobierno ha actuado como tenía que actuar en un régimen democrático y serán los tribunales los que decidan en última instancia la solidez jurídica de los escritos de impugnación. La izquierda abertzale de Otegi también ha desempeñado a la perfección la función que libremente habían previsto y diseñado, aunque esta afirmación, debo confesarlo, también es el resultado de una convicción política y no la conclusión de hechos acreditados.

De los propios actos de los dirigentes de Batasuna se deduce neri-

dianamente que tanto la alternativa de ASB como la creación y organización de las agrupaciones electorales constituían piezas subalternas integrantes de una estrategia que buscaba activar y cohesionar el cuerpo social y político de la izquierda abertzale, más que la participación en los comicios a través de estas alternativas. Si hubieran entendido realmente la participación en estas elecciones como una cuestión clave para reanudar o avanzar en lo que ellos llaman el «proceso democrático», es obvio que habrían abordado la legalización de la nueva formación bajo unas claves bien distintas a las que se han manejado con ASB.

Desgraciadamente, la legalización no se plantea como el medio a través del cual se oficializa y se institucionaliza la representación social que ostenta, sino como un

instrumento de negociación, como una de las contrapartidas que se pondrán en la mesa de diálogo para el cese definitivo de la violencia. Hasta que eso suceda las espadas seguirán en alto, líderes como Karmelo Landa nos advertirán, a su manera, de las «consecuencias gravísimas» si se tuerce el proceso democrático y se invalidan sus candidaturas.

No obstante, todos sabemos que después del 27 de mayo la izquierda abertzale reconocerá los resultados de ANV como propios. Entonces se iniciará de nuevo la partida para el Gobierno y la izquierda abertzale. Los efectos de la ilegalidad en parte habrán quedado superados y el diálogo tendrá seguramente menos dificultades de orden formal. Veremos si el juego de apariencias continúa.

■ x.gurrutxaga@diario-elcorreo.com



XABIER GURRUTXAGA